

Nicaragua. Entre la corrupción y la exclusión

Luis Serra

El artículo presenta un análisis del proceso político que atraviesa Nicaragua a partir del resultado de las elecciones presidenciales de noviembre de 2001 y de las políticas implementadas por el actual Gobierno. La lucha contra la corrupción condujo a la división del gobernante Partido Liberal Constitucional, y a una situación conflictiva que ha obstaculizado el funcionamiento de las instituciones. El Frente Sandinista de Liberación Nacional, como segundo partido importante, y la Iglesia católica, como principal actor político, han apoyado la estabilidad, modificando el cuadro de alianzas original. El contexto social es de pobreza, emigración e inseguridad. Se destaca el papel de los actores civiles en canalizar las demandas ciudadanas y promover el desarrollo humano.

El escenario político

En las elecciones de 2001 se impuso la fórmula presidencial de Enrique Bolaños y José Rizo, del Partido Liberal Constitucional (PLC), con 56% de los votos válidos, frente a 42% alcanzado por los candidatos del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), Daniel Ortega y Agustín

Jarquín. Los escaños en la Asamblea Nacional se dividieron entre los dos partidos mayoritarios: 53 diputados del PLC (incluyendo el ex-presidente Arnoldo Alemán); 38 del FSLN (una de ellas para Ortega); y 1 diputado del Partido Conservador. Fueron electas 20 diputadas (22%, 14 del FSLN), duplicando la proporción de la anterior Asamblea, y en el Parlamen-

Luis Serra: profesor del Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad Centroamericana, Managua.

Palabras clave: situación política, crisis social, sociedad civil, democracia, Nicaragua.

to Centroamericano), alcanzaron 8 escaños (40%), mostrando un cierto avance en la equidad de género. En un clima de tensión bajo acusaciones mutuas de fraude, votaron 72% de los inscritos¹. Hubo polarización entre las dos fuerzas políticas principales. Ello es reflejo, por un lado, de la exclusión de terceros partidos luego de la reforma a la ley electoral acordada entre el PLC y el FLSN, en un pacto de reparto de cuotas en los poderes del Estado (2000), y por otro es muestra de la herencia política de la guerra ocurrida durante los años 80 entre el movimiento revolucionario sandinista ligado al bloque socialista y los sectores opositores apadrinados por el gobierno norteamericano. En la «larga duración», el bipartidismo vertebró la dinámica política desde el siglo XIX, así como las guerras y los pactos entre caudillos y grupos de poder son parte de la práctica política nacional.

Fue evidente la intervención del gobierno norteamericano a favor del candidato liberal, también facilitando la ruptura del Partido Conservador y así aglutinar fuerzas alrededor del PLC contra el FSLN (al igual que en las elecciones de 1990 y 1996). La campaña se intensificó luego del 11 de septiembre de 2001, cuando las imágenes del «terrorismo internacional» fueron asociadas con el sandinismo, reavivando el temor popular a otro conflicto bélico contra EEUU. Después de 11 años, la mayoría sigue teniendo una valoración negativa del proceso revolucionario de

los 80, que se expresa en un voto antisandinista pese a la crisis socioeconómica vivida en los 90, y a la corrupción e ineficacia de los gobiernos neoliberales. El FSLN mantiene la adhesión de un sector importante (conformada básicamente por grupos sociales de estratos pobres y medios, beneficiados por la distribución de recursos y la participación lograda en los 80), y es la primera fuerza de oposición y/o de alianza con el partido gobernante. Posee una base política sólida pese al centralismo organizativo que limita las críticas o liderazgos alternativos, pese a haber presentado por tercera vez un candidato vulnerable que goza de amplia aceptación interna pero es rechazado fuera del partido.

Debe destacarse la importante participación electoral², que triplica los índices de sistemas democráticos «desarrollados», como consecuencia de una campaña de motivación al voto a cargo de partidos y organizaciones civiles. Esto revela avances en la consideración del voto como derecho ciudadano: 80% de la población piensa que la democracia es preferible a cualquier otra forma de gobierno, sin embargo 26% opina que en algunas circunstancias es preferible un gobierno autoritario (PNUD). La transición a una democracia representativa se ha consolidado en

1. V. «Elecciones 2001» en *Envío* N° 236, 11-12/2001, UCA, Managua.

2. En las elecciones presidenciales de 1996 participó 76% de los inscritos, cifra que descendió a 66% en las elecciones municipales de 2000.

las últimas décadas, pese a que la participación es mucho menor en las instancias locales y periódicas como los cabildos municipales, la auditoría del gasto público o el seguimiento de las promesas electorales. La opción de presentar candidatos al gobierno municipal fuera de los partidos fue anulada en la última reforma electoral, concentrando el control partidario sobre la vida política local. Los partidos tampoco promueven la participación, ya que se caracterizan por su dinámica electorera enfocada en obtener cargos, organizados en una estructura vertical custodiada por caudillos carismáticos que oscilan entre pactos y enfrentamientos. Un indicador de la inestabilidad partidaria y de la inconsistencia ideológica y programática se observa en la frecuente mudanza de políticos de un partido a otro por conflictos personales, alianzas electorales o intereses particulares.

La política anticorrupción

Bolaños asume a comienzos de 2002 lanzando una campaña anticorrupción, con gran aceptación entre la ciudadanía y las organizaciones internacionales. Ello condujo inevitablemente al enfrentamiento con el líder del PLC, el ex-presidente Alemán, debido a una serie de estafas contra el Estado realizadas durante su gobierno (1997-2001) por casi 600 millones de dólares, utilizados en beneficio personal y de allegados. La mayoría de la dirigencia partidaria cerró filas en defensa del líder,

acusando a Bolaños de traicionar a la agrupación y de buscar controlarla. El PLC se dividió entre los seguidores de Alemán y quienes buscaban un nuevo liderazgo liberal. Un pequeño grupo de seis diputados se separó del partido formando una nueva bancada (Azul y Blanco), lo que significó para el Ejecutivo la pérdida de su base parlamentaria, indispensable para la acción de gobierno. El aislamiento de Bolaños es mayor en los otros poderes del Estado como la Corte Suprema de Justicia, el Consejo Supremo Electoral, la Contraloría y la Fiscalía, cuya dirección está distribuida entre el FSLN y el PLC, lo cual limita su acción y muestra su necesidad de establecer alianzas y fortalecer una base social propia. Por ello ha promovido la conformación de un nuevo partido, el Grupo de Unidad Liberal (luego de un intento fallido de desplazar del control del PLC al grupo de Alemán), tratando de unificar distintas corrientes y personalidades liberales y apostando a la desarticulación del PLC con la condena y desaparición de Alemán del escenario político. En este proyecto de Bolaños ha sido clave el apoyo estadounidense que le ha proporcionado información, financiamiento y respaldo político. Por su parte el Gobierno ha respondido dócilmente a las demandas de Bush, apoyando la guerra en Irak –con envío de tropas de control–, votando en foros internacionales en sintonía con EEUU –como la condena a Cuba en la Comisión de Derechos Humanos de la ONU–, reduciendo el armamento del ejército y re-

formulando su misión en función del terrorismo y el narcotráfico. Asimismo, actores internacionales como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y la Unión Europea habían señalado la corrupción del gobierno anterior y la necesidad de tomar medidas para frenarla. En el ámbito nacional, la política contra la corrupción ya era una demanda de muchas organizaciones civiles que incluía a gremios empresariales y fundamentalmente medios de comunicación, que habían investigado algunos casos de fraude y liderado la opinión pública pese a las medidas del gobierno de Alemán contra ellos. En la Asamblea, fue clave el apoyo del FSLN a la política anticorrupción. Pudo cambiarse la Junta Directiva, presidida por Alemán –con un voto de diferencia que costó meses conseguir–, y desaforarlo. Con base en pruebas recabadas en el país, EEUU y Panamá, fue condenado y recluido (en su casa durante un tiempo), al igual que otros antiguos funcionarios, algunos de los cuales huyeron del país.

La fuerte reacción del sector arnoldista ha agudizado la contradicción política que atraviesan distintos poderes del Estado, la Iglesia y la sociedad civil, paralizando el funcionamiento estatal y afectando seriamente la gobernabilidad democrática y la institucionalidad. El grupo de Alemán ha utilizado todos los medios imaginables en apoyo de sus intereses y de su líder, que van desde acciones de protesta colectiva hasta chantajes políticos, a veces

a través de terceros. Por su parte la Iglesia católica reaccionó enfrentando al Gobierno al verse implicada en las denuncias de corrupción hechas contra Alemán. Luego de la tensión que tuvo su clímax en la denuncia del arzobispo Obando y Bravo, principal líder político del país desde hace años³, de que Bolaños gestionaba en El Vaticano su reemplazo, hubo un acercamiento entre ambos poderes. El Ejecutivo suspendió algunas investigaciones y concedió a la jerarquía eclesiástica un poder de veto sobre la política educativa y demográfica, a cambio de su valioso respaldo.

La parálisis de la labor legislativa debido al conflicto contra el grupo arnoldista fue superada en gran medida en 2003, cuando el FSLN y la bancada Azul y Blanco logran el control de la Directiva de la Asamblea y de las comisiones de trabajo, contando con una mayoría simple que permite aprobar leyes ordinarias a pesar del boicot de los diputados del PLC. Así han avanzado proyectos que han estado estancados desde hace años, como la reglamentación de la autonomía y la ley de aguas y de minería; por otro lado, algunas comisiones han jugado un rol importante de fiscalización del Gobierno y de mediación en conflictos sociales.

3. Monseñor Obando y Bravo fue mediador entre Somoza y la oposición en 1978-1979. Lideró la oposición al gobierno sandinista en los años 80 y arbitró en distintos conflictos políticos durante los 90.

Relaciones Gobierno-sociedad civil

La ciudadanía se manifestó a favor de las medidas contra la corrupción (en 97%)⁴ y firmando en apoyo al desafuero de Alemán. En menor proporción participó en manifestaciones públicas, especialmente luego del uso político que hiciera el FSLN del incipiente movimiento ciudadano pluralista, dinamizado por reconocidas redes sociales como la Coordinadora Civil, la Red por la Democracia, la Red de Mujeres, el Movimiento Estudiantil Universitario, sindicatos, organizaciones comunales, religiosas y otros actores. Sin embargo, el entusiasmo anticorrupción fue decreciendo al conocerse la limitada reducción salarial de los altos funcionarios, y que por ejemplo Bolaños recibía una jugosa pensión como ex-vicepresidente (1997-2000) además de su sueldo y viáticos como presidente. También se recordó que había sido coordinador de la Comisión Anticorrupción del gobierno de Alemán, sin ver ni decir nada. Por último, el freno gubernamental a la investigación de casos emblemáticos, y varias negociaciones «debajo de la mesa», terminaron por desanimar a organizaciones y ciudadanos que veían cómo la «irrenunciable» política anticorrupción se limitaba a unos pocos casos con mucha retórica de «nueva era».

A diferencia de la política de control y confrontación del gobierno de Alemán *vis à vis* las organizaciones de la socie-

dad civil y los medios de comunicación (salvo los vinculados al PLC y a las iglesias), el nuevo gobierno ha demostrado mayor apertura; un ejemplo es la consulta de políticas y presupuesto al Consejo de Planificación Económico y Social (Conpes)⁵. Su propuesta de reforma del Estado generó gran polémica: preveía reducir el número de funcionarios (diputados, jueces, contralores), despartidarizar los poderes, una ley de servicio civil, la apertura del sistema electoral a otros partidos y asociaciones civiles a nivel municipal, la elección uninominal de diputados, la reforma a la inmunidad (o impunidad) de funcionarios; todas estas medidas lógicamente generaron un drástico rechazo de los partidos dominantes. La excepción fue una decisión aceptada por el Consejo Electoral: el reconocimiento de la personería jurídica de muchos partidos (de 26 en 1996 quedaban 3 en 2001), luego de un fallo de la Corte Suprema que declaró de carácter inconstitucional las restricciones de la ley electoral pactada entre el FSLN y el PLC.

Asimismo el actual gobierno ha desarrollado una capacidad negociadora minimizando la represión de demandas sociales combativas, como la de los productores cafetaleros y obreros agrícolas afectados por la crisis, la de los

4. Ideso: «Encuesta de opinión política», UCA, Managua, junio de 2002.

5. Se debate en la sociedad civil si el Conpes es una forma de cooptar la participación ciudadana con fines de obtener una imagen pública y por cumplir con requisitos del FMI-BM, o si efectivamente hay oportunidades de incidencia en las políticas públicas.

estudiantes universitarios en defensa del derecho constitucional a obtener 6% del presupuesto para la educación, la de los trabajadores de la educación y la salud por un salario mínimo, la de los transportistas pidiendo un ajuste de tarifas, la de los ex-combatientes por sus promesas históricas, la de las comunidades étnicas por sus derechos a la tierra y la reglamentación de la autonomía costeña que finalmente lograron. Estas movilizaciones muestran la vitalidad de distintos actores de una sociedad civil rica en diversidad cultural, proyectos y organizaciones, convertidos en los últimos años en instancias de participación ciudadana que los partidos políticos no canalizan, y de atención a demandas sociales a las que el Estado no responde. Sin duda el multitudinario universo de las organizaciones civiles⁶ constituye un sector heterogéneo que incluye sindicatos, cooperativas, movimientos sociales, organizaciones comunales, grupos filantrópicos y religiosos, y organizaciones de educación y desarrollo. Un índice de 67% de la población participa regularmente en alguna asociación civil (conformada más por hombres) o religiosa (donde predominan las mujeres)⁷.

En los últimos años se han destacado las ONGs de desarrollo. Son aproximadamente 800 organizaciones que trabajan en la promoción del desarrollo humano en áreas como derechos de la niñez y de las mujeres, agroecología, salud y rehabilitación, derechos huma-

nos, crédito, cultura y ciudadanía, gracias a una cooperación externa que ha ido decreciendo en los últimos tiempos y aumentando la condicionalidad de sus fondos. Gran parte de las ONGs se encuentran nucleadas en redes nacionales, destacándose la Coordinadora Civil, la Red Democracia y Desarrollo Local, la Red Mujeres contra la Violencia, la Coordinadora Niñez y Adolescencia, la Federación de ONGs, la Federación de Organismos por la Rehabilitación e Integración, y la Red de Migraciones. Estas redes han permitido superar parcialmente la tendencia a la dispersión (geográfica, sectorial y temática) y la descoordinación entre actores sociales, a fin de consensuar agendas y premisas de incidencia política a escala nacional y regional, como fue el caso de las propuestas de un plan de desarrollo sostenible luego del huracán Mitch, el código de la niñez y adolescencia, la ley contra la violencia familiar, la ley de participación ciudadana, las propuestas a la política y el plan nacional de población, la estrategia de reducción de la pobreza, la política de descentralización y de migraciones. Estos avances hay que ubicarlos dentro de la paradoja de que los esfuerzos redoblados de incidencia política (orientados por la cooperación

6. En los registros del Ministerio de Gobernación se contabilizan unas 2.800 organizaciones sin fines de lucro. No todas están activas, pero muchísimas más existen de hecho y no han pasado por el costoso y burocrático trámite de personería jurídica requerido por una ley especial.

7. PNUD: *Informe de Desarrollo Humano de Nicaragua*, Managua, 2002.

externa) se dirigen a un Estado debilitado debido al traspaso de decisiones a instancias supranacionales, dado su carácter fragmentado, burocrático y deficitario, y su concepción como simple facilitador del mercado capitalista en tanto regulador socioeconómico que debería responder a las demandas sociales. El resultado es la insatisfacción de las demandas y la pérdida de legitimidad del Gobierno, tal como sucede en otros países de América Latina. Por su parte, la negociación del Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y Estados Unidos (Cafta) ha concentrado la atención de los actores sociales nicaragüenses. Gran parte de ellos se ha manifestado públicamente en la 7ª Ronda realizada en Managua (septiembre de 2003), exigiendo una moratoria de tres años en el plazo fijado por Washington, para poder analizar las alternativas posibles, consensuar nacional y regionalmente las propuestas, y fortalecer las capacidades de los productores locales. El Cafta concita diferentes posturas y expectativas. Las negociaciones dependen de los equipos de gobierno de los países involucrados, con escasa participación civil y pobre información pública. Algunos grupos son entusiastas y favorables al tratado, como los gremios empresariales con oportunidades de colocar sus productos en el mercado estadounidense, así como el actual equipo gubernamental. Otro sector participa con mayor recelo en las negociaciones, donde la sociedad civil tiene escasa voz y ningún voto, aceptando la inevitabilidad de la

globalización y del tratado, pero planteando una moratoria para fortalecer ventajas y analizar mejor el convenio. Por último hay una posición de franca oposición ligada a una red de movimientos sociales regionales, que se basa en las ventajas que obtiene el capital norteamericano, las consecuencias observadas en México (crisis del agro y desempleo) luego de 10 años del Tlcán, y en general se opone a un modelo de desarrollo que prioriza el comercio y el capital externo como motores para mejorar la economía y las condiciones de vida de la población.

Políticas públicas y vida cotidiana

En la vida cotidiana reina la desinformación sobre los asuntos y debates mencionados, que solo preocupan a un sector de la ciudadanía. Al mismo tiempo en el imaginario social predomina una desconfianza hacia la clase política y empresarial que se traduce en apatía y desmovilización. La preocupación por la sobrevivencia concentra las mentes y acciones de la mayoría de la población, que vive en situación de pobreza (45,8% según el método oficial⁸ de «agregado de consumo», y 75% con «necesidades insatisfechas»), o de indigencia (de 15% a 46%), con mayor incidencia en el campo que en las ciudades, y entre mujeres, niños e indígenas. A la vez, 6 de cada 10 niños están en situación de pobreza, y 2 de ellos

8. INEC: *Encuesta de Hogares de Medición de Niveles de Vida EMNV 2001*, Managua.

en extrema pobreza. El desempleo abierto alcanza a 13% de la población económicamente activa, a lo que debe sumarse 36% en situación de subempleo en el sector informal, es decir que la mitad de la población carece de un empleo estable con salario justo. El ingreso promedio por habitante es de 60 dólares: 2 dólares diarios que alcanzan para un plato y medio de comida básica⁹. En el nivel macroeconómico, la tasa de crecimiento ha caído a menos de 1% en los últimos dos años, mientras la población aumenta en 2,7% anual¹⁰. El PIB por habitante anual, de 460 dólares, representa la mitad del de hace 40 años. La balanza comercial registra un déficit de alrededor de 1.000 millones de dólares anuales, cubierto con préstamos, cooperación y remesas. La deuda externa asciende a 6.400 millones y la interna a 1.700 millones (frente a un PIB anual de 2.100 millones). Según el Índice de Desarrollo Humano, Nicaragua ha descendido al puesto 119 de 174 países del mundo, ubicándose en los últimos lugares del continente con Haití, Honduras y Bolivia. En este contexto la emigración a Costa Rica, Guatemala o EEUU aparece como la mejor opción para conseguir un empleo remunerado. Se calcula que más de un millón de nicaragüenses viven y trabajan fuera del país. Muchos de ellos son jóvenes, y aportan a sus fa-

milias unos 800 millones de dólares por año, o sea, es la principal fuente de ingresos del país a costa de la desintegración familiar, la discriminación xenófoba y la violación de derechos laborales y humanos¹¹.

La política gubernamental para enfrentar estos fenómenos se ha centrado en la Estrategia Reforzada de Crecimiento Económico y Reducción de la Pobreza 2001-2015 (Ercerp), heredada del gobierno de Alemán y condición puesta por el FMI para acceder a la HIPC (Iniciativa de Alivio a Países Pobres Altamente Endeudados), basada en cuatro pilares: crecimiento económico de base amplia, inversión en capital humano, protección a grupos vulnerables, gobernabilidad y desarrollo institucional¹². La Ercerp ha sido criticada por carecer de una visión de desarrollo sostenible basada en promover las capacidades humanas. Se incorporan medidas asistencialistas de corto plazo, y presupone una disponibilidad de fondos a partir de la condo-

9. PNUD: ob. cit.

10. La tasa de fecundidad es elevada: 3,2% en 2001 (de 4,4% en el ámbito rural y 2,6% en el urbano). Sin embargo en los años 90 se observa una tendencia decreciente (1985: 4,6%; 1998: 3,6%).

11. Martha Cranshaw: «Análisis de las migraciones en Nicaragua», Managua, 2003.

12. Entre las principales metas que se propone alcanzar la Ercerp para 2005 se encuentran: reducir la extrema pobreza (de 17% en 1998 a 14% en 2005); tener una tasa de crecimiento económico anual de 4,2% en el mismo periodo; aumentar la tasa neta de escolaridad primaria (75% a 83%); reducir la tasa de analfabetismo (19% a 16%); de la mortalidad materna (148 a 129 por 100.000 nacidos vivos); de la mortalidad infantil (-1 año) (40 a 32 por 1.000 nacidos vivos); de la mortalidad de niños (-5 años) (50 a 37 por 100 nacidos vivos); de la desnutrición crónica de niños (-5 años) (20% a 16%); aumento de la cobertura nacional de agua potable (67% a 75%).

nación de la deuda externa (mediante la HIPC, que lleva tres años de negociación), una elevada tasa de crecimiento económico sostenida, una coordinación interministerial en función de priorizar esta estrategia y una participación decidida de la sociedad civil. A dos años de iniciada, los indicadores señalan retrocesos en distintas variables: en 2003 quedaron fuera de las escuelas unos 840.000 niños, mientras que el analfabetismo se ha incrementado; solo 12% de la juventud está en la universidad; hay recesión económica con tasas por habitante negativas; el déficit fiscal de 2002 fue de 293 millones de dólares; el gasto público en salud descendió de 50 dólares por habitante en 1983 a 16 dólares en 2002¹³; mientras se agudiza la desnutrición y la mortalidad infantil especialmente en zonas cafetaleras, se ha elevado la concentración de ingresos y recursos en una elite¹⁴.

Hay políticas que han agravado las condiciones de vida, como la privatización de los servicios públicos (condicionada por el FMI). De igual modo la reforma tributaria ha recaído sobre los bienes de consumo masivo, mientras se condona a los bancos el pago del impuesto sobre la renta y se les abona los altos intereses de los bonos emitidos por el anterior gobierno. La subasta de fincas hipotecadas por deudas bancarias debido a la crisis agraria y del mercado mundial afecta a cientos de productores, que perderán su patrimonio cayendo en el desempleo.

Esta problemática se vincula con el aumento de los delitos, particularmente contra la propiedad y las personas¹⁵, la formación de pandillas juveniles urbanas y bandas armadas rurales, la expansión del narcotráfico y la drogadicción, sumado a la violencia interpersonal especialmente contra niños y mujeres en el ámbito familiar (1 de cada 3 mujeres reconoce haber sufrido violencia), todo lo cual contribuye a un clima de inseguridad que agrava los efectos de la pobreza.

A fines de 2002 el Gobierno planteó una Estrategia Nacional de Desarrollo (END) basada en la conformación de «clusters» o conglomerados con inversión extranjera y ligados al mercado externo (siguiendo la propuesta del Instituto Centroamericano de Administración de Empresas y la Universidad de Harvard), en rubros donde Nicaragua tiene ventajas comparativas, como ganadería, pesca, minería, forestal, turismo, textiles y agroindustria¹⁶. Recientemente el equipo ministerial propuso un Plan de Desarrollo a 25 años con ambiciosos objetivos en distintos ámbitos socioeconómicos, incluyendo una reforma del Estado y

13. V. Jaime Espinoza: «Un sistema de salud que no funciona» en *Envío* N° 245, 8/2002, UCA, Managua.

14. En 2001, el sector 10% más rico absorbía 46% de los ingresos nacionales; el 1% más rico, 18,4% (INEC).

15. Entre 1997 y 2001 aumentaron 29% los delitos sexuales y contra la vida, y 17% contra la propiedad (v. *Boletín Estadístico*, Policía Nacional, Managua, 2002).

manteniendo la estrategia de conglomerados. Diversos actores han señalado la incongruencia de la END con la Ercerp, ya que dejaría sin inversiones a las zonas pobres consideradas sin potencial de desarrollo, como las áreas rurales campesinas productoras de alimentos; por otro lado, en los conglomerados no se toma en cuenta el aporte de la pequeña y mediana industria nacional (mayoritaria en producción y empleo), priorizando la inversión tipo maquila con escasa interacción económica a escala interna y deplorables condiciones laborales. Como señaló la Coordinadora Civil, «La propuesta gubernamental es una continuidad del rol que se le ha venido dando al país dentro del proceso de globalización, y es la entrega de la economía a empresas transnacionales desplazando al capital nacional»¹⁷.

Retos a futuro

A corto plazo, las elecciones municipales de 2004 traerán cambios en las alianzas y los partidos. Los sectores antisandinistas buscarán la forma de

establecer acuerdos, de lo contrario perderían en la primera vuelta contra un FSLN favorecido por la división de los liberales. La incógnita es hasta qué punto el pragmatismo permitirá superar las agudas contradicciones entre el PLC y el partido liberal bolañista¹⁸. A mediano plazo, en las elecciones nacionales de 2005 las agrupaciones excluidas en los últimos años podrían cambiar la correlación de fuerzas. Nuevos partidos con líderes honestos y propuestas renovadoras atraerían parte del voto sandinista (sobre todo si Ortega mantiene su candidatura), fortaleciendo un pluralismo parlamentario que abriría oportunidades para una reforma del Estado. El carácter profundo y estructural de los problemas del país requiere de un proceso prolongado, planificado y conjunto a fin de democratizar el sistema político. Allí los actores civiles deben asumir un rol protagónico dada la resistencia de la clase política a ampliar la democracia más allá de las elecciones periódicas y, por otro lado, dada la necesidad de democratizar las relaciones de poder en los distintos ámbitos de la vida social. La creciente dinámica pluralista de la sociedad civil abre oportunidades para fortalecer la capacidad de los actores democratizantes en esta fase histórica marcada desde 1990 por el retroceso de los sectores populares ante el avance de los representantes del capital transnacional.

16. V. Presidencia de la República: *Bases para una Nicaragua próspera*, Managua, 2003.

17. Coordinadora Civil: «Criterios preliminares en la consulta del Gobierno al plan de desarrollo», septiembre de 2003. El traspaso de la economía a capitales externos durante los años 90 incluye bancos, compañías aseguradoras, maderos, servicios de telefonía y electricidad, minas, pesca, empresas textiles, refinamiento y distribución de combustible, exploración petrolera.

18. La experiencia histórica muestra que los partidos creados desde los gobiernos tienen poca sostenibilidad.